Documento N° 40

El Bloque Norte de las AUC: Parapolítica y victimización en el departamento del Atlántico

Angella López Lavalle

Laura Martín Flórez

Reynell Badillo Sarmiento

El Bloque Norte de las AUC: parapolítica y victimización en el departamento del Atlántico

Angella López Lavalle * Laura Martín Flórez **
Reynell Badillo Sarmiento ***

Septiembre de 2020

Para citar: López, A., Martín, L., y Badillo, R. (2020). *El Bloque Norte de las AUC: parapolítica y victimización en el departamento del Atlántico*. Barranquilla: Centro de Pensamiento UNCaribe, Universidad del Norte.

Índice

1. Introducción	2
2. Parapolítica: cooptación local y representación nacional	3
3. Victimización: extorsiones a comerciantes, narcotráfico y asesinatos selectivos	7
4. Conclusiones	8
5. Referencias	10

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte. Contacto: angellal@uninorte.edu.co

**Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte. Contacto: lmmartin@uninorte.edu.co

***Internacionalista de la Universidad del Norte y estudiante de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Investigador adscrito al Centro de Pensamiento UNCaribe. Contacto: reynellb@uninorte.edu.co

1. Introducción

En el departamento del Atlántico hubo presencia de actores armados desde la década de 1980. Durante esos años, estructuras armadas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército Nacional de Liberación (ELN) incursionaron a través de municipios como Repelón y Luruaco, dada su cercanía con el canal del Dique y las rutas de fácil acceso desde el departamento de Bolívar (Arias, 2008). Este primer momento del conflicto armado en el departamento, denominado por Trejos et al. (2018) como de “antecedentes”, estuvo caracterizado por la presencia de frentes urbanos de grupos insurgentes que, a pesar de lograr algunas acciones propagandísticas (como la toma del barrio El Pueblito en manos de 80 guerrilleros del EPL en 1988 o la toma de la sede de Acción Cívica del barrio Las Malvinas por parte del ELN en el mismo año), no tenían la capacidad operativa para consolidar su presencia y ejecutar acciones bélicas de gran magnitud.

Durante los años noventa, el panorama de violencia insurgente cambia con la desmovilización del M-19 y parte del EPL, lo que implicó que algunas estructuras urbanas del ELN y las FARC-EP se fortalecieran, hasta el punto de que realizaron ataques contra estaciones de policía, bancos, transporte público y la sede de Fedegan. Este segundo momento, denominado como de “desarrollo”, estuvo marcado por el uso del secuestro extorsivo como instrumento de violencia por parte de las guerrillas (Trejos, Martínez y Badillo, 2020). Justamente sería esta práctica la que abrió la puerta a que en 1999 el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entrara al departamento. Luego del secuestro de nueve personas en la ciénaga del Torno por parte del ELN, las AUC asesinaron a 39 pescadores acusados de apoyar a la guerrilla (Verdad Abierta, 17 de diciembre de 2008). Con esto, se marcó la incursión del grupo armado al departamento y se dio inicio al periodo más crudo de conflictividad. Con la llegada de las AUC, se inicia el periodo de “decadencia” de las organizaciones insurgentes y su desaparición en el escenario de violencia armada en el Atlántico.

En el departamento del Atlántico, el Bloque Norte operó durante sus primeros años a través del Grupo Atlántico, que en el 2003 sería renombrado como frente José Pablo Díaz (FJPD) en honor al comandante del frente desde 1999 hasta su asesinato en el 2003 en manos de las FARC-EP. A partir de ese año, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, asume el mando de la estructura. Al contrario de la dinámica del conflicto en otros departamentos, en el caso del Atlántico la llegada de los paramilitares no tuvo como propósito principal confrontar con las guerrillas. Esto, porque su presencia no era lo suficientemente fuerte para ejercer una presencia significativa en la capital del departamento y en los municipios del Atlántico (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

A pesar de que las AUC cometieron asesinatos selectivos en el departamento, muchas veces con aparentes fines ideológicos y de limpieza social, el FJPD se concentró en establecer una red de crimen organizado y de cooptación de recursos del Estado. Así, en Barranquilla el incremento de la violencia en el año 2000 se atribuye a la entrada del Bloque Norte para apropiarse de los mercados ilegales, a la conformación de empresas de seguridad privada y a la confrontación con grupos del crimen organizado que habían hecho presencia desde la década de los ochenta, pero no al combate de la guerrilla (Arias, 2008). En general, las ventajas estratégicas que ofrecía Barranquilla y sus municipios circundantes, como acceso al principal puerto comercial del Caribe y su posición como bisagra entre la Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María (dos subregiones con presencia de estructuras guerrilleras), explican la fuerte entrada del Bloque Norte. Esto ha hecho que en el imaginario colectivo se niegue la existencia del conflicto armado en el Atlántico. No obstante, a pesar de estas dinámicas de violencia esencialmente urbana y no de carácter antiliberal, hu-

bo grandes niveles de victimización ciudadana y de cooptación de la institucionalidad, por lo que resulta necesario esclarecer esas dinámicas.

Ese es justamente el objetivo del presente texto, por lo que en adelante se abordarán dos fenómenos relacionados con la presencia de las AUC en el departamento: la parapolítica y la victimización en el marco del conflicto armado. En el caso de la parapolítica, se observarán los múltiples nexos entre el FJPD y la élite política del departamento, que cumplió un rol esencial en permitir el control del grupo armado en el territorio, hasta el punto de que influenciaron en las decisiones tomadas sobre la Ley de Justicia y Paz. En cuanto al segundo punto, se analizará la victimización a partir de las dinámicas de cooptación y control de recursos económicos que el FJPD utilizó para crear y solidificar un nuevo orden social criminal en el territorio. Con estos dos aspectos se refuta la creencia de que la presencia paramilitar, a diferencia de otros departamentos, fue nula en el Atlántico.

2. Parapolítica: cooptación local y representación nacional

Uno de los objetivos del FJPD en el departamento era cooptar los recursos de las administraciones locales para financiar sus actividades criminales. Para ello, usó dos estrategias diferenciadas: por un lado, el FJPD hizo elegir a varios alcaldes y concejales afines a su causa en varios municipios del departamento e, incluso, en Barranquilla. Por otro lado, las AUC buscaron representación nacional para incidir en la formulación de la Ley de Justicia y Paz, por lo que apoyaron campañas de senadores y representantes para el periodo legislativo de 2006-2010.

Esta incursión política implicaba para el FJPD adentrarse en grandes casas políticas de la ciudad que, por su músculo financiero y su experiencia podían permanecer reticentes a la posibilidad de buscar aliados dentro de la ilegalidad. Así lo manifiesta Carlos García, alias 'Gonzalo' o 'El Médico', encargado político del FJPD, quien afirmó en 2008 que "la organización tenía una estructura pobre en Atlántico y no tenía plata para darles a los políticos", por lo que

la injerencia de 'Jorge 40' en la política del departamento del Atlántico era ínfima. Ahí hay gente demasiado estructurada y con demasiado dinero [...]. Los industriales no tienen que sentarse en una mesa con las AUC a hacer campaña ni a decirles que los apoyen ni les entreguen un peso" (Semana, 14 de octubre de 2006)

Esto explicaría por qué en otros departamentos (como Antioquia, Córdoba, Magdalena y Sucre) el número de congresistas vinculados a las AUC era considerablemente mayor. Aun así, entre 2006 y 2009, se hizo evidente que al menos 5 congresistas del departamento habían sido financiados por el paramilitarismo. Entre estos, el único condenado en ese momento fue el exsenador Dieb Maloof (Verdad Abierta, 20 de agosto de 2013).

La narrativa que asume que las grandes casas políticas del departamento no necesitaron a las AUC se ha extendido como consecuencia de esto y ha permitido una postura negacionista del conflicto y una separación clara entre legalidad e ilegalidad. Sin embargo, hechos como la condena en 2013 del Representante a la Cámara Jaime Cervantes, las declaraciones de David Char en la Jurisdicción Especial para la Paz en el 2019 y la admisión de Álvaro Ashton en esta misma jurisdicción por sus vínculos con los paramilitares interpelean directamente esta visión negacionista del conflicto y la parapolítica en el departamento.

Particularmente, para el caso de David Char se debe replantear la noción de las grandes casas políticas en Barranquilla como ajenas a las dinámicas del conflicto.

Antes del 2005, la parapolítica se direccionó principalmente a la cooptación de recursos públicos y el control sobre las administraciones de los municipios del Atlántico. En las zonas urbanas, las AUC contribuyeron en elegir a candidatos afines a su causa a cambio de beneficios penales, políticos y económicos, precarizando la democracia en el departamento y materializando sus intereses particulares (Centro nacional de Memoria Histórica, 2017). Así, el FJPD no se dedicó únicamente al control de rutas de narcotráfico, sino que tejió redes con políticos activos para preñar recursos de las administraciones locales y, en particular, de los contratos de los sectores de la salud y la educación (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

En los casos en que los funcionarios públicos se resistían eran violentados, como ocurrió en 2003 con el secretario de salud de Sabanalarga, Antonio José Muñoz Vizcaíno, ya que se opuso a entregar la contratación en salud al FJPD y porque, de acuerdo con informes de policía judicial, iba a viajar a Bogotá para denunciar las vinculaciones entre el FJPD y la administradora del régimen subsidiado (Verdad Abierta, 11 de noviembre de 2011). Por razones similares fue asesinado en el 2004 el entonces alcalde de Santo Tomás, Nelson Mejía Sarmiento, caso al que se ha vinculado el exsenador Dieb Maloof (El Tiempo, 29 de abril de 2008). En Soledad asesinaron en 2003 al candidato a la Alcaldía, José Luis Castillo Bolívar, y posteriormente extrajeron cuantiosos recursos de la Alcaldía que ganó su esposa, Rosa Stella Ibañez Alonso, elegida para el periodo 2004–2007. De esta forma, ya sea a través de la elección de candidatos afines a su causa o de la violencia en caso de encontrar oposición, se estima que el frente se quedaba con el 5% de los contratos y desviaban principalmente los recursos de las Secretarías de Educación y Salud de las alcaldías que controlaban (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

Los vínculos de la exalcaldesa Ibañez con las AUC conllevaron a su condena en 2010, por acuerdos que otorgaban al FJPD un control estricto sobre el Hospital Materno Infantil de Soledad, que fue declarado por Mario Marengo, alias ‘el Gordo’, como: “[...] un fortín político que debía poner entre cuatro o cinco mil votos” (Laverde, 2018). Asimismo, según declaraciones de Marengo, Dieb Maloof buscó obtener contratos y cargos burocráticos del hospital durante su campaña para las elecciones de 2006 (Verdad Abierta, 30 de enero de 2013), y ‘Don Antonio’ reveló que se había realizado un pacto con Álvaro Ashton durante su campaña como senador para que el político manejara el hospital Materno Infantil. Según Don Antonio, las AUC hicieron “renunciar al anterior gerente para montar a Francisco Romero, muy amigo de Ashton” (Laverde, 2018). Alfredo Arraut, alcalde de Soledad entre 2001 y 2003, fue condenado junto a Ibañez por las mismas razones, con lo que se demuestra el estricto control que tenían los paramilitares sobre la administración y el presupuesto del municipio.

En otras instituciones, como la Triple A en Barranquilla, el FJPD adquirió el 10% del dinero destinado a los contratos para la adecuación de caños, y parte de la construcción de Transmetro (El Tiempo, 8 de octubre de 2006). La infiltración del FJPD en la economía llegó a tal gravedad que Don Antonio y los paramilitares controlaron la Cooperativa de Leche Coolechera con el objetivo de utilizarlo como lavado de dinero proveniente del narcotráfico y como un medio para imponer la fuerza e influencia en la región (Verdad Abierta, 18 de octubre de 2011). Así mismo, el grupo paramilitar se apoderó de más de la décima parte de las contrataciones por parte de las alcaldías y gobernaciones del territorio e invirtió dinero para las estrategias de infiltración en la política y el ejército, entre las que se encuentran los sobornos a empleados de la rama judicial y el pago a la Fiscalía para obtener información.

El control durante este periodo fue tan marcado en los municipios del departamento, que el frente paramilitar organizaba reuniones periódicas con los diferentes mandatarios. Norberto Medina, exalcalde de Santa Lucía, declaró que las AUC organizaban reuniones en Calamar a las que invitaban a los dirigentes de los municipios y les exigían ponerle votos a un candidato al Senado (El Herald, 16 de marzo de 2015). Además, el ex alcalde de la ciudad, Bernardo Hoyos, dijo que a la campaña de Guillermo Hoenigsberg del año 2003 ingresaron 2.500 millones de pesos provenientes del Bloque Norte de las AUC (Verdad Abierta, 20 de octubre de 2008).

Incluso, la cooptación de recursos locales se llegó a gestionar desde el senado. De acuerdo con una investigación de la Corporación Nuevo Arcoiris, Dieb Maloof fue el encargado de manipular las leyes que permitirían a las AUC apropiarse de los recursos de la salud girados a la Costa Atlántica desde 2003, promoviendo cambios desde el Legislativo (Sevillano, s.f.). Desde el senado, Dieb Maloof fue clave para que las AUC se hicieran con los recursos de la salud por medio de trece cooperativas de trabajo gerenciadas por amigos y personas cercanas tanto al Bloque Norte como al entonces Senador.

A partir del 2005, el FJPD utilizó la mayoría de los recursos conseguidos durante sus primeros años para enfocarse en el nivel nacional e incidir en la Ley de Justicia y Paz que se estaba debatiendo durante ese periodo en el congreso. Si bien desde julio de 2003, tras la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito, se da inicio a la desmovilización de las AUC en todo el país, es solo hasta marzo de 2006 que las 16 estructuras del Bloque Norte anuncian su desmovilización (Arias, 2008). En la versión que rindió a la Corte Suprema de Justicia alias 'El Gordo', este aseguró que Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', y sus hombres más cercanos, a pesar de estar en medio de la desmovilización paramilitar, crearon un plan para seguir teniendo aliados en la clase política de la Costa Caribe en vista que se acercaban las elecciones al Congreso de 2006 (Verdad Abierta, 20 de agosto de 2013).

Esta estrategia del grupo de 'Jorge 40' llevó el nombre de "Plan Caribe", y consistió en que el alcalde de Barranquilla para el periodo 2004 - 2007, Guillermo Hoenigsberg, brindaría su apoyo a candidatos al Congreso que eran respaldados por los paramilitares. Según señaló Marengo, entre estos se encontraban Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof y otros que no han sido condenados, como Mario Varón, Tarquino Pacheco y Álvaro Ashton (Verdad Abierta, 30 de enero de 2013). Según Marengo, alias 'Gonzalo' hizo un pacto con Hoenigsberg para que les garantizara a estos políticos una participación burocrática en la Alcaldía de Barranquilla, y que así pudieran hacer su campaña en la capital del Atlántico. En adición, acordaron que un porcentaje de la contratación de la ciudad se destinaría como pago a las AUC, para compensar el apoyo que Hoenigsberg había recibido en su campaña. En este trato también se incluyeron varios concejales de Barranquilla y de Soledad, entre los que mencionó a Juan Carlos Ospino (Partido de la U), Alejandro Munárriz (entonces liberal) y el diputado Luis Eduardo Diazgranados (Voluntad Popular) (Verdad Abierta, 30 de enero de 2013).

Alias 'El Médico', quien era uno de los miembros más importantes del FJPD, fue clave en la implementación de este plan. Su labor en un principio era básicamente la de contactar a 'Don Antonio', jefe militar y de finanzas, con los sectores políticos y de las administraciones públicas en el Atlántico. Pero a principios de 2005 su labor cambió por instrucciones de 'Jorge 40', quien le encargó viajar a Bogotá para tratar de incidir en los congresistas que estaban debatiendo la Ley de Justicia y Paz (Semana, 14 de octubre de 2006).

'El Médico' reconoció abiertamente que su trabajo era hacer lobby en el Congreso, y que entre los congresistas que colaboraron con él se encontraban Jorge Caballero y Dieb Maloof (El Espectador, 3 de noviembre de 2013). Además, logró que se aprobara el artículo

que reconocía a los paramilitares como delincuentes políticos, artículo que más adelante la Corte Constitucional declaró inexecutable. En sus declaraciones admitió que su trabajo giraba principalmente en salvar los artículos 64 y 71 de la Ley de Justicia y Paz, que tenían que ver con la sedición (delito político). Estos habían sido desestimados y, según 'El Médico', se requirió invertir bastante tiempo en lobby para recuperarlos. No obstante, ha dicho que lo único que los representantes y senadores esperaban eran votos, no dinero. Además, dijo que mientras en otros departamentos ellos buscaban a los políticos para que apoyaran el proceso paramilitar, en Atlántico los políticos los buscaron a ellos (Semana, 14 de octubre de 2006).

Entre los políticos que recibieron el respaldo de los paramilitares en el Atlántico se encuentra Álvaro Ashton, elegido representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico para los periodos 1998-2002 y 2002-2006 y, posteriormente, elegido senador de la República para los periodos 2006-2010 y 2010-2014. Ashton es acusado de aliarse con el FJPD con el fin de obtener beneficios burocráticos en los departamentos de Atlántico y Magdalena; así aseguró su llegada al Congreso a cambio de poner su función legislativa al servicio de las AUC (Guzmán, 2019). Según fue indicado por la JEP, el Hospital Materno Infantil de Soledad también se puso a disposición de Ashton por cuenta de los paramilitares. Allí nombró gerente a Luis Francisco Romero Racedo, miembro de su grupo político, y como coordinador médico a su sobrino, Fabián Arturo Ashton. Según declaró Álvaro Ashton, quien le planteó el respaldo de las Autodefensas fue alias 'El Médico', que buscaba incidir en el trámite de la Ley de Justicia y Paz (El Espectador, 28 de enero de 2020).

Cabe destacar el caso de David Char, quien perteneció a una de las grandes casas políticas de Barranquilla; no obstante, tejió una alianza con las AUC para que estas lo respaldaran durante su campaña a cambio de apoyarlos en el legislativo. Según Char, durante su campaña para 2006 compartió su sede política con Mario Marengo, quien se encargaba de atender a los dirigentes de los municipios y comentarles sobre su alianza (El Espectador, 18 de octubre de 2019). La única condición del grupo paramilitar sobre la campaña de Char era que su fórmula para la Cámara de Representantes debía ser Alfredo Arraut, exalcalde de Soledad; sin embargo, esto no se llegó a materializar. Jaime Cervantes, representante entre 2002 - 2006 y 2006 - 2010, fue quien reemplazó a Arraut una vez este rompió su alianza con Char. Sin embargo, Char asegura que su partido no aceptó a Cervantes, por lo que no se aliaron con él. La Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante Cervantes luego de que él mismo aceptara haberse aliado como miembros del FJPD. Entre los hechos que lo vinculan con los paramilitares estaba la asistencia a una reunión con jefes paramilitares en el sitio denominado La Mesa y acuerdos con las AUC por medio de los que coadyudó a la cooptación del Estado (Verdad Abierta, 20 de agosto de 2013).

Todo este escenario es descrito por Trejos et al. (2020) como "clientelismo armado", dado que el FJPD fungió como intermediario de muchas relaciones político-electorales en el departamento. A cambio de obtener beneficios económicos, judiciales y operativos, el FJPD ofreció a los políticos conseguir votantes, que eran presionados a través de la fuerza para elegir a los candidatos afines al grupo armado. Durante un primer momento, antes del 2005, el FJPD se concentró en capturar los recursos de los municipios del Atlántico, especialmente los de la salud y educación. Luego del 2005, en el marco de las campañas legislativas para el periodo 2006-2010, la organización utilizó los recursos conseguidos para obtener el apoyo de congresistas que materializaran los intereses de los paramilitares al interior del legislativo.

3. Victimización: extorsiones a comerciantes, narcotráfico y asesinatos selectivos

Las víctimas del FJPD no tuvieron un perfil definido. Se puede encontrar a comerciantes que se negaron al pago de extorsiones, pero también a profesores universitarios y estudiantes, sindicalistas y hasta miembros de su propia organización que eran asesinados por ajustes de cuentas. Según la base de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del CNMH, el FJPD es responsable de 449 asesinatos, 60 casos de desaparición forzada, 24 víctimas de masacres y más de 9.000 personas desplazadas desde su llegada en 1996 hasta el 2006 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). No obstante, el portafolio de actividades criminales que más afectó a la población civil puede entenderse desde dos actividades: la extorsión a comerciantes y el uso de la ciudad como ruta de exportación de clorhidrato de cocaína.

Sobre el primero, podría decirse que se presentó entre los años 2000 y 2006. En el 2005, el gremio de los tenderos barranquilleros calculó, a través de la Unión Nacional de Comerciantes, que cada uno tenía que pagar semanalmente 50.000 pesos al grupo paramilitar para evitar problemas de seguridad. Además, se estima que estas extorsiones a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, entre otros informales, pudo alcanzar el valor de 3 mil millones de pesos por mes (El Heraldo, 19 de octubre de 2011). Así mismo, de acuerdo con un informe de carácter reservado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá realizado en el 2011, durante el 2004 el FJPD recaudó más de 3.200 millones de pesos, entre los cuales 500 millones de pesos provenían de la extorsión (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Aquellos comerciantes que se resistieran a la acción del grupo armado eran víctimas de acciones violentas en su contra, como se puede evidenciar en el hecho de que en el 2000 fueron asesinados 26 tenderos debido al incumplimiento del pago semanal (El Tiempo, 6 de febrero de 2007).

Con respecto al narcotráfico, el Atlántico, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), se convirtió en una zona de tránsito y retaguardia para todo el Bloque Norte. El lavado de activos fruto del narcotráfico y la captura de rentas públicas le permitió al FJPD el control criminal del departamento. De acuerdo con la Fiscalía, alias Carlos Arturo Marulanda era el encargado de recibir la cocaína en los puertos de Bélgica, Holanda y Francia, además de que mantenía comunicación directa con Jorge 40. También desde los puertos del Atlántico se envió droga hacia Estados Unidos y Venezuela, lo que permitió ganancias de entre 9.000 y 10.000 euros por cada kilo de cocaína vendido (El Tiempo, 8 de octubre de 2006). Por otro lado, cuando el Bloque Norte tomó control completo de las rutas de narcotráfico en el Atlántico, Jorge 40 estableció otra forma para cooptación de recursos económicos para fortalecer al grupo armado, consistente en el pago de un impuesto o cobro hecho a los narcotraficantes para poder pasar o despachar la droga en cualquier zona del departamento (El Tiempo, 8 de octubre de 2006).

Sobre este punto, cabe recordar que el narcotráfico en Barranquilla se consolidó desde, al menos, una década antes de la llegada de las AUC. La condición de doble puerto fluvial y marítimo de la ciudad atrajo a grupos del crimen organizado como el Cartel de la Costa, el clan Nasser Arana y los mellizos Mejía Múnera, que establecieron rutas para la exportación de clorhidrato de cocaína. El Bloque Norte heredó ese mercado ilegal a través de la derrota de algunos grupos que controlaban el microtráfico en la ciudad (como Los Mezas en 1999) y la negociación con los mellizos Mejía Múnera, que habían logrado apropiarse del narcotráfico luego de la desarticulación del Cartel de la Costa. Los Mejía Múnera ofrecieron a Vicente Castaño dos millones de dólares a cambio de que les otorgara el mando del Bloque

Vencedores de Arauca, donde Miguel fingió su desmovilización como máximo líder de la organización contrainsurgente a pesar de que solamente visitó la región en tres ocasiones y mantuvo su perfil como narcotraficante (El Tiempo, 16 de septiembre de 2017).

El costo de la hegemonía paramilitar en el departamento se reflejó en el hecho de que las tasas de homicidios y desplazamiento forzado en el departamento crecieron, como lo evidenció el Observatorio de Derechos Humanos y DIH (2011). Los municipios más afectados por los homicidios entre 2003 y 2006 son, en su orden, Barranquilla con 1.664 (61 % del total departamental), Soledad con 572 (21 %) y Malambo con 116 (6 %) (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005). De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 890 sindicalistas, profesores y estudiantes fueron amenazados por el grupo paramilitar entre los años 2005 y 2006. Del mismo modo, entre 2000 y 2006 fueron asesinados en el Atlántico 42 sindicalistas, de los cuales 16 eran docentes y el resto hacían parte de los sectores de la salud, alimentos y servicios públicos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Entre las víctimas más emblemáticas del FJPD se encuentra el profesor Alfredo Correa de Andreis, asesinado el 17 de septiembre del 2004 en la ciudad de Barranquilla. El motivo del asesinato para el FJPD era que el profesor era un “adoctrinador” de la guerrilla, además de que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se ofreció información para estigmatizarlo (Martínez, 2016).

4. Conclusiones

A pesar de que en el imaginario colectivo atlanticense se considera que el departamento no sufrió las consecuencias del conflicto armado, en este texto se ha demostrado que la presencia de frentes urbanos de guerrillas durante los años ochenta y noventa y la consolidación del Bloque Norte de las AUC entre 1999 y 2006 son evidencias de que en el departamento sí hubo violencia armada. Particularmente, el objetivo de este escrito era abordar dos fenómenos relacionados con la violencia paramilitar: la cooptación institucional del FJPD en el departamento y los patrones de victimización hacia la población civil.

Sobre el primer punto, se determinó que la parapolítica en el departamento tuvo dos momentos de ejecución. El primero, entre el 2000 y el 2004, estuvo centrado en fortalecer los vínculos del FJPD con las administraciones locales. Para ello, apoyaron en las elecciones locales a candidatos afines a su causa y, a través de la violencia, amenazaron o asesinaron a quienes se negaron a cooperar con su tarea de beneficiarse de las rentas de las administraciones públicas. El segundo periodo, entre 2004 y 2006, consistió en utilizar las alianzas realizadas los años anteriores para apoyar a candidatos al Congreso de la República con el objetivo de transformar y proponer algunas leyes que los beneficiaran penal (Ley de Justicia y Paz) y económicamente (transformación del sistema de salud).

Sobre el segundo punto, se ha establecido que los patrones de victimización provienen de dos actividades ilegales. Por un lado, la extorsión de comerciantes. A través de la imposición de cuotas semanales a fin de ofrecerles “protección” (vacunas) a los comerciantes, el FJPD estableció un sistema de control social que implicaba la muerte de quien no cumplía o, incluso, el saqueo de los locales comerciales. Por otro lado, la violencia de las AUC estuvo relacionada con su establecimiento como actor hegemónico dentro de las dinámicas del narcotráfico en la ciudad. A través de la derrota de sus competidores y la cooptación de otros actores del crimen organizado, las AUC lograron controlar estas dinámicas y ejercer violencia para mantener el mercado ilegal. A pesar de esto, no debe olvidarse que el

FJPD asesinó y desplazó a profesores, sindicalistas y estudiantes, por lo que no puede considerarse solo una violencia derivada del crimen organizado, sino que también buscaban establecer un orden social particular y eliminar a todo aquel que consideraran una amenaza o un disidente.

5. Referencias

Arias, A. (2008). Contexto de violencia y conflicto armado. En C. López (coord. y ed.), *Monografía político-electoral del departamento del Atlántico 1997 a 2007* (pp. 2-25). Bogotá: Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoiris, Universidad de los Andes.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *En honor a su memoria: víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano*. Bogotá: CNMH.

El Espectador. (18 de octubre de 2019). *Así fue como David Char tejió sus alianzas con los paramilitares*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/asi-fue-como-david-char-tejio-sus-alianzas-con-los-paramilitares-articulo-886711/>

El Espectador. (28 de enero de 2020). *Cartel de la toga: Álvaro Ashton reconoce pago de \$800 millones para archivar proceso*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cartel-de-la-toga-alvaro-ashton-reconoce-pago-de-800-millones-para-archivar-proceso-articulo-901952/>

El Espectador. (3 de noviembre de 2013). *La confesión de alias "Gonzalo"*. Recuperado de [elespectador.com/noticias/nacional/la-confesion-de-alias-gonzalo/](https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-confesion-de-alias-gonzalo/)

El Herald. (16 de marzo de 2015). *Cada municipio del Atlántico vivió su calvario con las AUC*. Recuperado de <https://www.elheraldo.co/judicial/cada-municipio-del-atlantico-vivio-su-calvario-con-las-auc-187749>

El Herald. (19 de octubre de 2011). *Al descubierto atrocidades de AUC en Atlántico*. Recuperado de <https://www.elheraldo.co/politica/al-descubierto-atrocidades-de-auc-en-atlantico-42405>

El Tiempo. (16 de septiembre de 2017). *Cupo del "Mellizo" en proceso con las AUC valió US\$ 2 millones*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/detalles-de-como-entro-narco-mellizo-en-proceso-con-las-auc-131476>

El Tiempo. (29 de abril de 2008). *Por fin 'Don Antonio' reconoció crimen de alcalde de Santo Tomás (Atlántico)*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4133241>

El Tiempo. (3 de febrero de 2007). *Así fue cómo los paramilitares se tomaron el departamento del Atlántico*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3425301>

El Tiempo. (8 de octubre de 2006). *Así opera el imperio criminal de 40*.

Guzmán, J. (2019). Violencia y elecciones en el Atlántico (IV). *La Silla Vacía*. Recuperado de <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-caribe/violencia-y-elecciones-atlantico-iv-71683>

Laverde, J. (11 de febrero de 2018). Los testimonios que tienen a Álvaro Ashton en la cárcel. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-testimonios-que-tienen-a-alvaro-ashton-en-la-carcel/>

Martinez, J. (2016). El asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis. *Las 2 Orillas*. Recu-

perado de <https://www.las2orillas.co/el-asesinato-del-profesor-alfredo-correa-de-andreis/>

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2012). *Diagnóstico de la situación de derechos humanos y DIH del departamento del Atlántico 2000 - I semestre de 2011*. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2005). *Dinámica reciente de la violencia en Barranquilla*. Bogotá: Vicepresidencia de la República.

Semana. (14 de octubre de 2006). "Yo le hice 'lobby' a la Ley de justicia y paz". Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/yo-hice-lobby-ley-justicia-paz/81451-3>

Sevillano, O. (s.f.) *Parapolítica, aún en la escena judicial*. Corporación Nuevo Arcoiris. Recuperado de <https://www.arcoiris.com.co/2012/09/parapolitica-aun-en-la-escena-judicial/>

Trejos, L., Guzmán, J., Badillo, R., y Martínez, F. (2020). Clientelismo armado en Barranquilla: el caso del Frente José Pablo Díaz (2003-2006). *Justicia*, 25(37), 49-70. 10.17081/just.25.37.4129

Trejos, L., Martínez, F., Badillo, R. (2020). Dinámicas del conflicto armado en la ciudad de Barranquilla: entre la marginalidad insurgente y el control paramilitar (1990-2006). En: L. Trejos (ed.), *Capacidad institucional y posacuerdo: panorama en el Caribe colombiano* (64-91). Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.

Trejos, L., Martínez, F., y Badillo, R. (2018). Aproximación a las dinámicas del conflicto armado en la ciudad de Barranquilla: entre la marginalidad insurgente y el control paramilitar 1990-2006. *Papel Político*, 23(2), 1-22.

Verdad Abierta. (11 de noviembre de 2011). 'Jorge 40' pagará 26 años de cárcel por asesinatos en Atlántico. Recuperado de <https://verdadabierta.com/condenado-jorge-40-a-26-anos-de-carcel-por-asesinatos-en-el-atlantico/>

Verdad Abierta. (17 de diciembre de 2008). *La masacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/la-masacre-de-nueva-venecia-se-origino-en-pivijay/>

Verdad Abierta. (18 de octubre de 2011). *El paso macabro de las AUC por Atlántico*. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/el-paso-macabro-del-bloque-norte-por-el-atlantico/>

Verdad Abierta. (2 de abril de 2009). *Parapolítica por departamentos*.

Verdad Abierta. (20 de agosto de 2013). *Parapolítica: Dieb Maloof*.

Verdad Abierta. (20 de agosto de 2013). *Parapolítica: Jaime Cervantes Varelo*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/parapolitica-jaime-cervantes-varelo/>

Verdad Abierta. (20 de octubre de 2008). *Guillermo Hoenigsberg, recibió dinero de los paras para financiar su campaña*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/guillermo-hoenigsberg-recibio-dinero-de-los-paras-para-financiar-su-campana/>

Verdad Abierta. (30 de enero de 2013). *El Plan Caribe de 'Jorge 40'*.